



SEMINARIO REGIONAL “AVANCES Y ACCIONES CLAVE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE EL CAIRO, A 15 AÑOS DE SU APROBACIÓN”

Sala Celso Furtado de la CEPAL
Santiago, 7 de octubre de 2009

Sesión

“Progresos y perspectivas de la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en América Latina y el Caribe”

Presentación de Dirk Jaspers_Faijer:

América Latina: avances y desafíos de la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 1994-2009

El documento que aquí se presenta, “Informe de América Latina sobre los progresos y las perspectivas de la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 1994-2009” —el que, por cierto, constituye una versión preliminar, sujeta a revisiones para una posterior publicación— fue preparado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, en estrecha coordinación con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y con la colaboración de la División de Asuntos de Género y la División de Desarrollo Social de la CEPAL.

Para su elaboración, se utilizó información proveniente de numerosas fuentes: reportes nacionales elaborados por los gobiernos de los países de América Latina; informes regionales y globales de diversos organismos internacionales; opiniones de especialistas, así como una serie de trabajos encargados a personas expertas que tuvieron como objetivo sistematizar y analizar las

acciones clave que los países desarrollaron en pos de la implementación del Programa de Acción de El Cairo en los pasados cinco años.

El informe se propone dar cuenta de los avances, limitaciones y asignaturas pendientes en la implementación del Programa de Acción de El Cairo y su relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en América Latina. A 15 años de la aprobación y a cinco años del fin del alcance del Programa, el documento busca también establecer perspectivas para el futuro, señalando los desafíos que la región enfrentará, tanto por no haber alcanzado los objetivos establecidos como por la aparición de nuevas problemáticas y aspectos emergentes no necesariamente considerados en El Cairo, y que tendrán una fuerte incidencia en la dinámica poblacional.

En el primer capítulo del documento se establece el marco del análisis: el enfoque de los derechos humanos; se pasa revista a los vínculos entre las metas establecidas en los ODM y las del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (PA-CIPD), y se expone una primera visión de su grado de avance regional.

En el segundo capítulo se desarrollan las particularidades del contexto socioeconómico, demográfico, cultural e institucional *latinoamericano*, contexto peculiar que justifica la necesidad de un informe regional para valorar los avances, limitaciones y desafíos en la implementación del Programa de Acción en los años pasados.

Tales avances, limitaciones y desafíos son analizados en el capítulo siguiente, considerando la situación a la luz de los indicadores de monitoreo de las metas, desagregando la información tanto por países como por dimensiones relevantes —sexo, edad, nivel educativo, lugar de residencia, condición étnico-racial— para evidenciar las brechas en el ejercicio de los derechos. En este tercer capítulo se listan y analizan también las acciones clave, desplegadas tanto a nivel regional como nacional, que ayudan a entender la evolución de los indicadores, así como la vigencia de las medidas adoptadas y reafirmadas en los procesos de evaluación de El Cairo —a los cinco y los diez años de su aprobación— para continuar con la implementación del Programa de Acción.

En el último capítulo del documento se proyecta el escenario latinoamericano hacia el año 2014 y más allá, brindando elementos para una futura agenda de trabajo regional en población y desarrollo, una vez que culmine el horizonte temporal del Programa de Acción de El Cairo, considerando la nueva generación de desafíos que depara el futuro de América Latina.

Pasando ahora a los planteamientos centrales del informe, se puede decir que América Latina ha experimentado un cambio demográfico profundo en las últimas décadas: la transición demográfica.

En la mayoría de los países latinoamericanos el descenso de la mortalidad inició el proceso de transición demográfica; esto se dio en un contexto de mejoramiento de las condiciones de vida, urbanización, incremento del nivel educativo, reducción de la fecundidad, expansión de la cobertura urbana de servicios sanitarios, adelantos de la medicina, ampliación de la cobertura de los servicios de salud, incluyendo la implementación de programas específicos de salud materno-infantil.

A mediados del siglo pasado, la esperanza de vida al nacer era de 52 años y la tasa de mortalidad infantil llegaba a las 127 defunciones por cada mil nacimientos; para el quinquenio 2005-2010 esos valores se estiman en 73,4 años y 21,7 por mil, respectivamente. Esta importante ganancia sobre la mortalidad obedeció, al inicio, principalmente al descenso de las causas de muerte por enfermedades infecciosas, parasitarias y respiratorias entre los niños. Posteriormente, la baja de la mortalidad se extendió hacia las otras edades, como consecuencia del cambio epidemiológico.

Sin embargo, el comportamiento de la mortalidad experimenta importantes diferencias, tanto entre los sexos —la esperanza de vida femenina al nacer supera a la masculina en 6,2 años en el quinquenio 2005-2010— como respecto de la etapa de la transición demográfica que está atravesando cada país. Así, a pesar de la trayectoria convergente que siguió la evolución de la mortalidad, partiendo de las grandes distancias que se observaban a mediados del siglo pasado, aún hoy persisten diferencias significativas, lo que pone de manifiesto que hay todavía un amplio

campo de acción para aumentar la supervivencia de las personas en la región, especialmente si se considera que el nivel de la mortalidad en ella es similar al que exhibían los países más desarrollados hace ya 25 años.

La fecundidad ha sido el factor del cambio demográfico que mayor incidencia ha tenido en la determinación de la estructura por edades de la población de los países. La tasa global de fecundidad bajó de 5,9 hijos por mujer en 1950-1955 a 2,4 hijos en el presente quinquenio. El volumen anual de nacimientos supera los 11 millones, alcanzó su máximo nivel en el período 1990-1995 y desde entonces ha venido descendiendo. La heterogeneidad de situaciones, como en el caso de la mortalidad, también es la regla.

Esta reducción de la fecundidad ha ocurrido en todos los países de la región, como consecuencia de un deseo de mujeres y hombres de tener un menor número de hijos, de un mayor acceso a la educación y un aumento en el uso de métodos modernos de planificación familiar, facilitado principalmente por la oferta de programas de salud reproductiva.

El hecho de que la fecundidad de las adolescentes sea la que registra los descensos menos pronunciados configura una situación que debe ser analizada y monitoreada por los servicios de salud, debido a los problemas sanitarios y sociales que trae aparejados. Las adolescentes aumentaron su aporte a la fecundidad total, prácticamente duplicándolo.

Al igual que con la mortalidad, la tasa global de fecundidad muestra grandes variaciones según las regiones del país en las que se habita, la residencia urbana o rural, el nivel de educación y de ingresos, la condición étnico-racial y otras variables.

En América Latina, la migración internacional juega un rol importante en la determinación del cambio demográfico, en la dinámica económica y en la caracterización social de los países. Durante el quinquenio 2005-2010 el crecimiento total de la población es inferior al crecimiento natural en la mayoría de ellos. Es posible que la migración internacional esté destinada a cumplir en el futuro un papel más importante que el actual en la dinámica poblacional de los países,

especialmente a mediano y largo plazo, en vista de la creciente globalización de las economías, el mayor acceso a los mercados de trabajo, las más amplias facilidades para la movilidad espacial de las personas, la creciente internacionalización de las redes familiares y —no menos importante— el efecto económico que tiene la migración sobre la situación de las personas y de las economías de la región.

Si la principal transformación demográfica de América Latina durante el siglo pasado estuvo determinada por su fuerte crecimiento —pasó de 161 millones de personas en 1950 a 547 millones en 2005—, la de este siglo corresponderá a las profundas transformaciones en su estructura por edades.

Los grupos etarios más jóvenes, que aumentaron 2,5 veces en el pasado medio siglo, disminuirán aproximadamente el 17% hacia 2050; en los mismos períodos, los adultos aumentaron 3,8 veces y se incrementarán en un 32%. Pero el aumento más impactante está dado por la evolución de las personas mayores, quienes crecieron 5,4 veces entre 1950 y 2005 y prácticamente se cuadruplicarán desde entonces hasta 2050, superando a la población joven por un margen del 30%.

En definitiva, todo esto no hace más que apuntar al envejecimiento de la estructura por edades de la población como la principal transformación demográfica actual. En el quinquenio 2005-2010 la población regional joven está estabilizada, la de edades activas aún crece, pero a un ritmo declinante, y la población adulta mayor aumenta. Esto, sin duda, confirma el hecho indiscutiblemente reconocido que el envejecimiento de la población es el principal fenómeno demográfico de esta época y que adquirirá especial relevancia en los años futuros.

Sin embargo, el crecimiento de la población adulta mayor no tendrá el mismo efecto en todos los casos ni será perceptible en el mismo período de tiempo. En algunos países o grupos de países, las poblaciones infantil y juvenil, así como la población en edades activas, tendrán todavía un gran protagonismo y seguirán planteando una demanda de vasta magnitud a los sectores sociales y un difícil desafío a las políticas públicas. Aun cuando es un fenómeno de tremenda importancia, poner

el énfasis solo en el envejecimiento puede conducir a que la atención se desvíe de estos otros grupos de personas, cuya situación en la sociedad no está, de ninguna manera, asegurada.

A diferencia de los países desarrollados, en los que la transición transcurrió en forma pausada, en América Latina se experimenta a mucha mayor velocidad, disminuyendo bruscamente los valores de la fecundidad y la mortalidad en un período de tiempo mucho menor que en los países que ya transitaron a las etapas muy avanzadas de este proceso.

Por otra parte, los países que en el mundo desarrollado atravesaron la transición demográfica cuentan con mayores recursos económicos para enfrentar las problemáticas que surgen al arribar a sus estadios más avanzados. Claramente no es esta la situación en que se encuentran los países de la región, que deben afrontar los nuevos desafíos derivados de transiciones avanzadas cuando en muchos casos todavía subsisten los correspondientes a las etapas iniciales, todo en un contexto de escasez de recursos.

Hoy, la región vive un momento propicio para replantearse el diseño de políticas. Buena parte de los países atraviesa un período en el que el peso relativo de las personas en edad dependiente decrece a causa de la baja de la fecundidad —que disminuye el peso de los niños— y del por el momento bajo peso relativo que representan las personas mayores. Esta situación, denominada “bono demográfico” o “ventana de oportunidades demográfica”, otorga un potencial respiro a las arcas públicas y permitiría un período de rediseño de las políticas públicas hacia enfoques de más largo aliento. Los programas de transferencias condicionadas, que buscan simultáneamente paliar situaciones de emergencia en materia de pobreza y cortar con su ciclo intergeneracional, son buenos ejemplos de este tipo de políticas. También lo son las reformas de los sistemas nacionales de salud, que cambian el paradigma fundado en la atención por otros basados en la prevención —única opción posible para el futuro envejecimiento a gran escala—, así como las políticas orientadas a garantizar una solución colectiva a las necesidades crecientes de cuidado en la sociedad, que supere su carga desproporcionada sobre el trabajo de las mujeres. Las políticas de corresponsabilidad entre hombres y mujeres y entre familias, Estado y mercado, que respondan a las necesidades actuales y futuras de cuidado en la región, constituyen un factor clave

para la cohesión social y el desarrollo inclusivo. Y, por supuesto, las inversiones en los jóvenes, particularmente en educación y salud, son tal vez las mejores que pueden realizarse, aprovechando el bono demográfico para enfrentar de mejor manera los desafíos del futuro envejecimiento.

Estas transformaciones demográficas conforman una de las particularidades del contexto regional en el que se procesó la implementación del Programa de Acción. Otras peculiaridades que deben ser destacadas son: en primer lugar, la gran y pertinaz desigualdad socioeconómica y el contrapunto entre un amplio segmento pobre excluido de la población y otro pequeño pero extremadamente acaudalado y poderoso; en segundo término, la complejidad y las contradicciones culturales, sobre todo en los temas de sexualidad y reproducción, género y familia, y por último, la debilidad institucional presente en la región, incluyendo el papel irregular del Estado, así como la importancia de la sociedad civil.

No me explayaré mayormente en estas particularidades, que se desarrollan en el informe, pero sí creo necesario remarcar que en el tercer trimestre del año 2008 América Latina cerró el ciclo de expansión económica más importante que experimentara desde 1970. El llamado *quinquenio de oro* —en rigor casi un sexenio, pues se extendió desde 2002 a 2008— registró mejoras en materia de pobreza, indigencia, calidad del empleo y en muchos casos desigualdad. También se observaron algunos avances en la institucionalidad y en el esfuerzo de los gobiernos en lo relativo al combate a la pobreza, la exclusión y la desigualdad. El sostenido crecimiento del gasto social es la primera evidencia en este sentido, continuando una tendencia que se advierte desde la segunda mitad de los años noventa. Dicho esto, hay que tener en cuenta que *América Latina es aún la región más desigual del mundo*. La heterogeneidad estructural es un rasgo que la CEPAL ha destacado en sus análisis de las economías y sociedades latinoamericanas, y esto es muy relevante para el examen del Programa de Acción y sus proyecciones al futuro.

En el marco de estas peculiaridades regionales, que por razones de tiempo no me es posible desarrollar en esta presentación, el informe se concentra, en su capítulo central, en la consideración de los avances, limitaciones y desafíos, así como en las acciones clave que a nivel nacional y regional se llevaron adelante para la implementación del Programa de Acción de El Cairo.

Al tener en cuenta la integración de los asuntos de población en la planificación del desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza, la primera constatación, de carácter general, es que la región ha dado pasos gigantescos en la mejora de las condiciones de vida de millones de mujeres y hombres. Decenas de millones de personas han salido de la pobreza y de la indigencia en los últimos cinco años, pero aún siendo un continente catalogado como de ingresos medios, más de 180 millones de pobres y más de 70 millones de indigentes interpelan la inequitativa distribución de las riquezas. Las personas indígenas y afrodescendientes sufren fuertes discriminaciones en el acceso a las oportunidades y el ejercicio de los derechos, y los indicadores lo reflejan bajo la forma de diferenciales absolutamente inaceptables respecto del resto de la población.

La consideración de los factores de población ha venido en aumento, incorporando información y análisis sociodemográficos para el diseño, la implementación y el monitoreo de las políticas públicas. Ha surgido o se ha fortalecido una institucionalidad que presta atención tanto a la población en su conjunto como a grupos específicos y determinadas personas. Sin embargo, persiste todavía una brecha entre el discurso político —que reconoce en general la necesidad de considerar la cuestión sociodemográfica aplicada a la gestión— y su efectiva puesta en práctica. El avance legislativo y su posterior reglamentación todavía no acompañan la mayor conciencia sobre estos temas. Así, los desafíos en este campo pasan tanto por fortalecer los organismos nacionales ya existentes como por dotar a la nueva institucionalidad emergente de capacidades para coordinar las políticas sectoriales, integrando los asuntos de la población y el desarrollo a la gestión.

El uso de la información y del conocimiento sociodemográfico para la formulación de planes y programas de desarrollo se ha reforzado y ampliado en toda la región. Se incrementaron las instancias de articulación, de transferencias de conocimiento y puesta en común de criterios y metodologías para la producción de esta información. Sin embargo, se manifiesta un déficit común de América Latina: la escasez de recursos humanos formados en demografía y estudios de población y desarrollo. Este déficit es particularmente manifiesto en los institutos nacionales

de estadísticas y en las oficinas de planeación, y este debería ser entonces un punto en el que los países de América Latina encararan una acción inmediata, mediante la instrumentación de instancias de formación y capacitación en los perfiles requeridos.

Aún existen campos temáticos muy relevantes en los que la cobertura y oportunidad de la información dista de ser aceptable, como en los casos de la mortalidad materna, el embarazo adolescente, la juventud, la emigración internacional, la discapacidad, la movilidad espacial de la población al interior de los países, la población indígena y afrodescendiente, los desastres naturales y la violencia basada en el género. En los últimos años, el progreso en el desarrollo de estadísticas de género ha sido importante, pero muchos países latinoamericanos carecen de capacidades para generar información en temas clave como la participación de las mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones, la pobreza con una perspectiva de género, el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres, el uso del tiempo y la violencia contra ellas.

Al considerar los avances, limitaciones y desafíos en materia de derechos reproductivos y salud sexual y reproductiva, el informe subraya que América Latina es la región en la que se observan mayores progresos en la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos, y cuenta con un importante desarrollo de marcos constitucionales, legales y de políticas públicas de acceso universal a la salud sexual y reproductiva en el contexto de El Cairo y los ODM. Estos marcos incorporan el enfoque de derechos, incluyendo su garantía y exigibilidad, la perspectiva de género y la cultural. La mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe está comprometida con los derechos reproductivos y la salud reproductiva de la población. Resta el desafío de elaborar jurisprudencia y regular y garantizar su efectiva implementación. Es preciso progresar en el monitoreo de las leyes y asignar los recursos adecuados para su cabal cumplimiento, todo lo que demanda mayores niveles de conciencia ciudadana sobre la exigibilidad de los derechos reproductivos de mujeres y hombres y sobre la indispensable participación de estos últimos en el cuidado de la salud sexual y reproductiva.

Persiste en la región la brecha entre la demanda y la oferta de métodos anticonceptivos. Disminuirla es un reto pendiente, un desafío que forma parte de otro mayor: cerrar la brecha de

implementación en materia de ejercicio de los derechos reproductivos y de acceso a la salud sexual y reproductiva, en particular con relación al acceso a los anticonceptivos modernos y a la educación sexual, la disminución de la fecundidad adolescente y de la mortalidad materna.

La respuesta al VIH y sida desarrollada en la región registra avances que podrían transformarla en la primera del mundo en alcanzar los compromisos acordados en El Cairo y en los ODM. Pero las iniciativas nacionales aún no son suficientes, pues los programas de prevención no alcanzan a las poblaciones de mayor riesgo y todavía son débiles. Son insuficientes los esfuerzos por aumentar el conocimiento de los jóvenes sobre el VIH y sida y su acceso a los servicios de prevención. Estigma y discriminación se ciernen sobre las personas con VIH, y sus derechos —incluyendo los reproductivos— se niegan frecuentemente. Aunque ha habido avances, los gobiernos deben elaborar respuestas más estratégicas, mejor coordinadas, enfatizando la prevención en la formulación de las políticas y asumiendo compromisos financieros más intensos que los actuales.

Los países deben considerar con la mayor atención la situación de adolescentes y jóvenes. En América Latina y el Caribe, la difusión de información y el acceso a la salud sexual y reproductiva continúan siendo insuficientes y muestran marcadas diferencias entre los sectores sociales, por lo que esto representa uno de los desafíos más importantes que deben encararse.

Como ya se dijo, la fecundidad adolescente registró menores descensos que la de los restantes grupos de edades, aumentando en forma importante su aporte a la fecundidad total. Las diferencias en los niveles de acuerdo al lugar de residencia (urbano o rural), al nivel educativo o la condición étnico-racial, imponen desigualdades en el ejercicio de los derechos y en el acceso a las oportunidades de una vida mejor. Se debe ampliar y mejorar la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes y jóvenes, incluyendo la educación sexual, los servicios adecuados a las necesidades de este grupo y el derecho a la privacidad/confidencialidad en su acceso y consulta.

La mortalidad infantil ha disminuido, pero aún persiste la alta mortalidad neonatal. Aunque los países están acortando las brechas entre los distintos grupos sociales, esta disminución no es suficiente. Las inequidades siguen siendo importantes e inaceptables, y frente a esta situación se deben redoblar los esfuerzos e intensificar las acciones para lograr una reducción en los sectores más rezagados, especialmente en los pueblos indígenas.

El avance en materia de mortalidad materna es poco claro, lo que supone un desafío que interpela la intensidad de las políticas que se han practicado y exige acrecentar los esfuerzos para mejorar en este ámbito, prioritario desde el punto de vista de los derechos. Persisten importantes inequidades en la salud materna de los diferentes grupos sociales, y es preciso entonces aumentar la energía destinada a hacer desaparecer estas brechas, también inaceptables.

Respecto del género y el empoderamiento de las mujeres, el informe señala que ha habido avances en la lucha contra la discriminación, la desigualdad y la inequidad, pero la situación de las mujeres latinoamericanas está aún lejos de resultar satisfactoria en varios frentes: rezagos en las remuneraciones percibidas a iguales tareas que los hombres; mayor informalidad en la integración al mercado de trabajo, con menor o ninguna protección laboral; jornadas laborales que se extienden y se multiplican, al mantenerse una distribución de roles tradicionales que sobrecarga a la población femenina con el cuidado de niños, enfermos y personas mayores; discriminación en el acceso a las oportunidades para integrarse a ámbitos de decisión, tanto en el plano público como privado; intolerables niveles de violencia de género; dificultades para el ejercicio de los derechos reproductivos y el acceso integral a la salud sexual y reproductiva.

La lucha contra la violencia hacia las mujeres está dando frutos. Una tercera generación de leyes contra la violencia de género es un indicador de la relevancia social del tema en la región; incluye la tipificación de nuevos delitos, que reconocen las situaciones que tienen lugar tanto dentro como fuera del hogar. El gran desafío sigue siendo su implementación, especialmente en lo que se refiere al acceso a la justicia y la sanción oportuna y adecuada.

La participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe ha crecido, tanto en los poderes ejecutivo y legislativo como en otros ámbitos del poder y de la toma de decisiones, tales como las dirigencias empresariales y académicas. Sin embargo, todavía no se alcanza la paridad y en muchos casos la velocidad a la que se produce el avance es muy lenta. Las mujeres latinoamericanas deben subordinar su ingreso al mercado laboral para atender las necesidades reproductivas de las familias, lo que afecta su autonomía económica. Las políticas que concilian el mundo productivo y el reproductivo apenas empiezan a aplicarse; resulta central entonces avanzar en su implementación, incluyendo siempre la perspectiva de género en su diseño, análisis y monitoreo.

En su apartado sobre “Generaciones: equidad y transferencias intergeneracionales”, el informe indica que en los últimos años la región continuó avanzando en la transición demográfica y su estructura por edades sigue modificándose, abriéndose para muchos una ventana demográfica de oportunidades, la cual es temporal. Para que este bono se convierta en beneficios reales, las transformaciones de la población deben acompañarse con fuertes inversiones en capital humano, en especial en las y los jóvenes. Fundamentalmente, se necesitan políticas educativas y de empleo adecuadas e integrales, para aprovechar los beneficios del bono sobre la cobertura educativa y potenciar sus efectos sobre la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.

Se han producido en la región avances sustantivos en materia de políticas e institucionalidad de la juventud, pero esta institucionalidad enfrenta varios retos en casi todos sus países. Entre ellos, incorporar un enfoque integral y transversal, que facilite la coordinación entre los distintos sectores de la administración pública, disminuya la duplicación de esfuerzos y ponga énfasis en actuaciones eficaces, centradas en modificar las situaciones preexistentes en que viven las personas jóvenes y orientadas a la generación de valor público para la sociedad en su conjunto.

El último apartado del tercer capítulo del informe se refiere a la migración internacional. Allí se señala que la preocupación de los países por este tema se ha incrementado y han sido varias las instancias de discusión y búsqueda de acuerdos. La mayoría de estos hitos configura una

realidad por discutir: más avances formales junto a más retrocesos reales en una construcción multilateral de la agenda migratoria que revela tensiones, contradicciones e incertidumbres de envergadura. Si bien hay avances formales y una progresiva sensibilización por temáticas antes invisibles, como la protección de los derechos de las personas migrantes y la discriminación que suelen sufrir muchas de ellas, esto ocurre en paralelo a un clima desfavorable a la inmigración en los países desarrollados. Revertir este clima constituye uno de los mayores desafíos, de la mano del impulso de una agenda global que reconozca los derechos de los migrantes y que logre focalizar y converger en ciertos temas frente a la dispersión de asuntos que emergen.

A continuación, el cuarto capítulo del informe avanza en las consideraciones relativas a los años que restan para la finalización del mandato de El Cairo, y reflexiona sobre la agenda futura, más allá del año 2014. Así, se concluye que una tarea fundamental de aquí hasta ese horizonte temporal es reafirmar el compromiso de alcanzar los objetivos de El Cairo y los ODM mediante la movilización de los recursos necesarios. La falta de fondos suficientes sigue siendo el mayor obstáculo para la plena consecución de esos objetivos.

Los avances de la región no están tallados en roca. Por el contrario, América Latina ya conoce, dolorosamente, lo que significa perder en épocas de crisis los progresos logrados durante las etapas de crecimiento. Es necesario que los gobiernos mantengan y aumenten los presupuestos destinados al desarrollo de los sistemas de información, a la formación de recursos humanos capacitados en demografía y población, a la implementación de políticas que tomen en cuenta las tendencias de la población y sus vínculos con el desarrollo, que busquen la igualdad de género y la promoción de los derechos reproductivos y la salud sexual y reproductiva.

El principal aprendizaje que resulta del análisis de lo ocurrido en los últimos 15 años es que se está frente a un proceso con un horizonte temporal mucho más lejano que el establecido en 1994 en El Cairo.

Para las próximas décadas, deben generarse nuevos acuerdos, nuevas metas deben ser fijadas y nuevas medidas deben ponerse en práctica. Hay una serie de temáticas emergentes,

algunas no explicitadas en el Programa de Acción del Cairo, que deben ser consideradas en la bitácora del futuro y que tienen relación directa con las dinámicas poblacionales, cuando no son derechamente parte de ellas. La profundización del envejecimiento, la existencia de sociedades con relaciones intergeneracionales más complejas, los efectos de la segunda transición demográfica, el cambio climático, los desastres naturales y las crisis humanitarias, la crisis económica y alimentaria, la expansión de la “nueva epidemia” del VIH, la articulación entre el rol productivo y el reproductivo plasmada en el Compromiso de Quito, el continuo proceso de urbanización asociado a la pobreza urbana, el creciente peso de la migración internacional son, entre otros, temas que cobrarán cada vez mayor importancia en el campo de las relaciones entre la población y el desarrollo. Estas temáticas solapan los desafíos emergentes con los todavía pendientes expuestos a lo largo del informe. Los gobiernos, la sociedad civil y los organismos de cooperación internacional debieran, con premura, comenzar a delinear la agenda y los planes de acción para enfrentar los complejos desafíos de las próximas décadas.

El escenario futuro ya está perfilado, y es necesaria la construcción de una agenda en materia de población y desarrollo, tanto global como regional, para los próximos 30 años, retomando los elementos del pasado reciente y del futuro emergente. Junto con esa agenda, es preciso establecer los instrumentos y mecanismos para continuar avanzando.

Y este, nuestro principal desafío, requiere de nuestra acción, ahora.

Muchas gracias